



INFORME DE COYUNTURA POLÍTICA

WWW.LYD.ORG

ISSN 2735-7589

N° 45
MARZO 2026

Contenido

TEMA DEL MES: GOBIERNO DE EMERGENCIA Y RECONFIGURACIÓN OPOSITORA...3	
CHILE BAJO LA LUPA: EVALUACIÓN CIUDADANA Y DESAFÍOS DEL GOBIERNO DE JOSÉ ANTONIO KAST	5
ALERTA CONCEPTUAL: LUNA DE MIEL	8

Informe preparado por el Programa Política y Sociedad Civil, Libertad y Desarrollo.
Responsable: Rodrigo Ubilla rubilla@lyd.org

TEMA DEL MES

GOBIERNO DE EMERGENCIA Y RECONFIGURACIÓN OPOSITORA

Lejos de constituir un mero trámite administrativo, la transición entre el Gobierno de Gabriel Boric y la administración de José Antonio Kast se configuró como un proceso de alta densidad política, caracterizado por controversias públicas, disputas interpretativas y déficits de coordinación institucional. Episodios como la controversia en torno al denominado “cable chino”, así como las discrepancias respecto de la situación fiscal heredada, evidenciaron tensiones significativas en los mecanismos de traspaso de información y en la confianza interadministrativa. Más allá de su dimensión coyuntural, este proceso puso de relieve la fragilidad de los marcos institucionales que regulan los cambios de Gobierno, abriendo un espacio de reflexión sobre la necesidad de ajustar los tiempos y protocolos de transición para reducir la incertidumbre política y administrativa.

En este contexto, el inicio del Gobierno del Presidente Kast ha estado marcado por un estilo de conducción que combina centralización decisional, rapidez en la instalación del aparato ejecutivo y una narrativa basada en la noción de “Gobierno de Emergencia”. Este encuadre ha operado como un dispositivo de legitimación orientado a justificar la adopción de medidas prioritarias en seguridad pública, control del gasto y crecimiento económico, sobre la base de un diagnóstico de crisis heredada. Desde el punto de vista del desempeño, esta estrategia ha mostrado fortalezas en términos de capacidad de articular la agenda, despliegue ministerial y coherencia discursiva inicial.

Asimismo, este mismo enfoque presenta tensiones relevantes. En primer lugar, la narrativa de emergencia, si bien eficaz para consolidar apoyos en áreas como seguridad, puede erosionar su capacidad de sostener legitimidad en el mediano plazo si no logra traducirse en resultados tangibles o si implica costos económicos directos para la ciudadanía. En segundo lugar, la centralización decisional, si bien tiene coherencia con un Gobierno de acción, puede limitar la flexibilidad política necesaria para negociar en un Congreso fragmentado, especialmente considerando la ausencia de mayorías propias. En este sentido, el desempeño legislativo inicial —aún acotado— refleja tanto las restricciones estructurales del sistema político, como la necesidad de sofisticar las estrategias de articulación con sectores opositores.

En esta segunda semana de Gobierno, las medidas adoptadas para enfrentar el alza de los precios de los combustibles producto de la guerra en Medio Oriente y la decisión de no otorgarle apoyo institucional a la postulación de la ex Presidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, constituyen una prueba de fuego para la actual administración. Equilibrar la coherencia de su discurso, con la contención de su base natural de apoyo y con la mitigación del impacto ciudadano producto de las acciones impulsadas es un desafío que no solo requiere carácter, sino también orden interno y disciplina de los partidos que lo sustentan.

Desde una perspectiva de oportunidades, el oficialismo debe lograr mantener una imagen inicial de cohesión interna, lo que constituye un activo estratégico en un escenario de alta fragmentación. La obtención de posiciones clave en la conducción del Congreso y la capacidad de construir acuerdos puntuales para la conformación de comisiones sugieren una estrategia orientada a la generación de mayorías flexibles. Asimismo, el énfasis en seguridad pública y orden ha demostrado ser políticamente rentable en el corto plazo, alineándose con las principales preocupaciones ciudadanas.

Sin embargo, la sostenibilidad de esta ventaja dependerá de la capacidad del Gobierno para transitar desde una lógica de urgencia hacia una agenda más estructural, sin perder coherencia ni apoyo

político, una ecuación difícil de alcanzar. Asimismo, el contexto internacional —marcado por tensiones geopolíticas y volatilidad en los mercados energéticos— introduce variables exógenas que afectan tanto el desempeño económico como la percepción ciudadana del Gobierno.

Paralelamente, la oposición enfrenta un proceso de reconfiguración caracterizado por una fragmentación significativa y la ausencia de un liderazgo articulador. Lejos de consolidarse como un bloque cohesionado, el espacio opositor se estructura en al menos tres polos diferenciados: un Frente Amplio orientado a reivindicar el legado del Gobierno saliente y proyectar una síntesis político-programática; un Partido Comunista con una estrategia más confrontacional y anclada en la movilización social; y una centroizquierda que busca posicionarse desde el pragmatismo en materias sensibles como seguridad, crecimiento y migración.

El desempeño opositor en esta etapa inicial ha sido, en términos generales, limitado. Las dificultades para articular posiciones comunes, evidenciadas en episodios como la fallida coordinación en la Cámara de Diputados, han debilitado su capacidad de incidencia legislativa y de construcción de una narrativa alternativa al oficialismo. A ello se suma la heterogeneidad estratégica de actores como la Democracia Cristiana, cuya conducta oscilante refuerza la percepción de desalineamiento interno.

Con todo, esta fragmentación no solo constituye una debilidad, sino también una potencial fuente de oportunidades. En primer lugar, abre espacio para la emergencia de configuraciones políticas más flexibles, capaces de adaptarse a un electorado menos ideologizado y más orientado a resultados. La eventual consolidación de una “cuarta vía”, basada en el pragmatismo y la moderación, representada por alcaldes de fuerte identidad progresista, podría capturar segmentos que hoy no se sienten representados por los polos tradicionales.

No obstante, estas oportunidades están condicionadas a la capacidad de la oposición para superar su actual dispersión y construir mínimos comunes programáticos. De lo contrario, corre el riesgo de quedar relegada a un rol reactivo, con baja capacidad de incidir en la agenda pública y en la discusión legislativa.

En este escenario, las principales tensiones del sistema político se estructuran en torno a tres ejes. En primer lugar, la disputa por la interpretación del estado del país —particularmente en materia fiscal y de seguridad— configura un clivaje central entre oficialismo y oposición, con implicancias directas en la legitimidad de las políticas públicas. En segundo lugar, la fragmentación del sistema de partidos dificulta la construcción de mayorías estables, obligando a ambos sectores a operar bajo lógicas de negociación permanente. En tercer lugar, la creciente relevancia de la geopolítica introduce nuevas dimensiones en la toma de decisiones, especialmente en ámbitos como infraestructura estratégica, energía, relaciones internacionales y el impacto económico de los conflictos internacionales.

En síntesis, el inicio del ciclo político bajo la administración Kast se caracteriza por un Gobierno con alta capacidad de instalación y coherencia estratégica inicial, pero enfrentado a restricciones estructurales y amenazas externas que tensionan su proyección, y por una oposición en proceso de redefinición, cuya debilidad organizativa convive con oportunidades de recomposición.

CHILE BAJO LA LUPA

EVALUACIÓN CIUDADANA Y DESAFÍOS DEL GOBIERNO DE JOSÉ ANTONIO KAST

Durante las últimas semanas de marzo, las encuestas de opinión pública han evidenciado un cambio significativo en la evaluación del Gobierno del Presidente José Antonio Kast. Los datos provenientes de Plaza Pública Cadem y de Panel Ciudadano de la UDD permiten observar no solo un deterioro en la aprobación presidencial, sino también una reconfiguración más compleja de las percepciones ciudadanas frente a las decisiones económicas y el relato gubernamental.

Un deterioro rápido y significativo

La aprobación presidencial ha experimentado una caída abrupta en un corto período de tiempo. Según Cadem, el respaldo al Gobierno descendió desde un 57% a mediados de marzo a un 47% hacia el 24 del mismo mes, mientras que la desaprobación aumentó desde un 34% a un 49%. Este movimiento implica un cambio neto de más de 20 puntos en el balance político, configurando un escenario de empate negativo.

Este patrón es consistente con los resultados del Panel Ciudadano, que sitúa la aprobación en torno al 42% y la desaprobación en un 48%. En conjunto, ambas mediciones sugieren el término de la tradicional “luna de miel” que suele caracterizar los primeros meses de un Gobierno.

Sin embargo, este deterioro no es homogéneo. La evidencia muestra que el descenso en la evaluación está fuertemente impulsado por segmentos específicos de la población, particularmente el votante habitual —más politizado e informado—, donde la desaprobación alcanza niveles significativamente superiores. Asimismo, se observa mayor rechazo en segmentos jóvenes y en niveles socioeconómicos medios y altos, grupos que tienden a tener expectativas más exigentes respecto de la gestión económica.

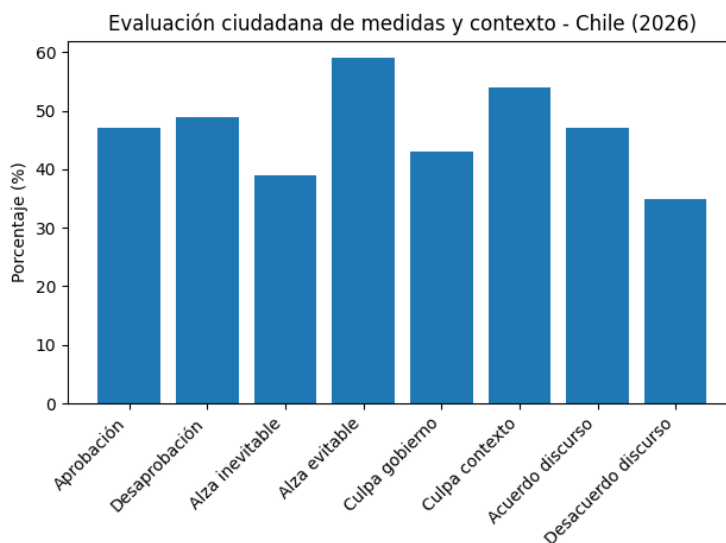
El factor crítico: el alza de los combustibles

El principal detonante de este cambio en la opinión pública parece estar asociado al alza en el precio de los combustibles. Un 97% de la población declara estar informada sobre la medida, lo que indica un alto nivel de visibilidad del problema.

Más relevante aún, un 59% considera que el alza era evitable, mientras solo un 39% la percibe como inevitable dada la estrechez fiscal. Esta brecha refleja un problema de legitimidad política de la decisión: no se cuestiona únicamente el resultado, sino la necesidad de la medida.

En términos de atribución de responsabilidades, si bien un 54% de los encuestados reconoce factores externos —como el alza internacional del petróleo—, un 43% responsabiliza directamente al Gobierno. Este porcentaje es particularmente significativo considerando que se trata de un *shock* exógeno, lo que sugiere debilidades en la gestión comunicacional y política de la crisis.

Gráfico N°1



Fuente: elaboración propia en base a Cadem N°640 (cuarta semana de marzo 2026) y Panel Ciudadano UDD (24 marzo 2026).

Relato versus decisiones: una desalineación crítica

Uno de los hallazgos más relevantes es la diferencia entre la evaluación del discurso gubernamental y la evaluación de sus decisiones concretas. El 47% de los encuestados está de acuerdo con la frase del Presidente: “no podemos comprar popularidad a costa de dineros que no tenemos”, lo que evidencia que el marco de responsabilidad fiscal mantiene niveles relevantes de legitimidad.

Sin embargo, este respaldo no se traduce en apoyo a las medidas específicas. La percepción de que el alza de combustibles era evitable indica que el problema no radica en el diagnóstico, sino en la implementación.

Este desacople entre relato y acción es clave para entender el deterioro en la aprobación. En términos simples, la ciudadanía parece aceptar la necesidad de disciplina fiscal, pero cuestiona cómo se están distribuyendo los costos de dicha disciplina.

Implicancias políticas

El escenario actual presenta riesgos, pero también oportunidades. Por una parte, el hecho de que el deterioro esté concentrado en un tema específico —y no en un rechazo generalizado al Gobierno— sugiere que la situación es reversible. Por otra, la persistencia de apoyo al marco discursivo fiscal constituye un activo político relevante.

No obstante, el riesgo principal radica en la consolidación de percepciones negativas en segmentos clave, especialmente en el votante habitual. Este grupo no solo influye en la formación de opinión pública, sino que también tiene mayor capacidad de amplificación política.

Asimismo, la percepción de injusticia o mala distribución de costos en políticas económicas puede erosionar rápidamente la legitimidad gubernamental, incluso en contextos donde las restricciones fiscales son objetivamente reales.

Conclusión: oportunidades

Las oportunidades políticas para revertir esta situación pasan por tres ejes fundamentales. Primero, mejorar la comunicación estratégica, explicando de manera más efectiva las restricciones reales y las alternativas consideradas. Segundo, fortalecer y visibilizar medidas de mitigación que permitan equilibrar los costos sociales de las decisiones económicas. Y tercero, alinear de manera más consistente el relato con las políticas implementadas, reduciendo la percepción de arbitrariedad o inequidad.

En definitiva, el Gobierno enfrenta un momento de inflexión: la “luna de miel” parece haber terminado, pero el capital político no está agotado. La forma en que se gestione esta coyuntura determinará si este episodio se consolida como un quiebre duradero o como una corrección transitoria dentro del ciclo político.

ALERTA CONCEPTUAL

LUNA DE MIEL

La “luna de miel presidencial” es comprendida como un intervalo de gracia, tradicionalmente asociado a los primeros cien días, en el que el mandatario electo goza de una alta aprobación y una relativa tregua legislativaⁱ. Este fenómeno, sin embargo, ha dejado de ser un periodo de mera cortesía republicana para transformarse en una ventana crítica de legitimidad en el ejercicio de las facultades del Ejecutivo al inicio de cada Gobierno. En la “era de la inmediatez”, la buena salud política de un Gobierno ya no depende únicamente de su legitimidad de origen, sino de su capacidad de “*delivery*”, entendida como la entrega efectiva y rápida de resultados que satisfagan las demandas ciudadanas. Así, la confianza en las instituciones hoy es contingente y se desplaza desde el apoyo difuso hacia una evaluación transaccional basada en la eficacia operativa del Estadoⁱⁱ.

La evidencia en Chile confirma una aceleración drástica en la erosión de este capital en los últimos periodos presidenciales. Mientras que en su segundo mandato el Presidente Sebastián Piñera vio agotarse su ventana de gracia hacia el quinto mes tras la caída de las expectativas económicas y una serie de desafortunadas declaraciones de sus ministros, Gabriel Boric enfrentó el quiebre de su luna de miel en apenas cuarenta días, marcado por una instalación deficitaria y una rápida desafección con la impronta de su Gobierno.

Pareciera ser que factores externos, tales como el incremento del precio de los combustibles producto de la guerra y su impacto en la economía nacional, pueden constituir un factor que gatille una obsolescencia prematura de la luna de miel de la administración de José Antonio Kast. El tiempo político se ha comprimido. En un entorno donde la ciudadanía demanda soluciones “aquí y ahora” junto con altas expectativas, el éxito del mandato depende de que el imperativo del *delivery* se materialice antes de que el entusiasmo electoral sea devorado por la impaciencia social.

Esta fragilidad se ve agudizada por la consolidación del votante obligado, un actor que procesa la información política mediante estrategias de baja elaboración cognitivaⁱⁱⁱ. Este nuevo electorado utiliza atajos heurísticos para evaluar al Gobierno, dejando de lado programas doctrinales o posiciones ideológicas, tomando una mayor preponderancia la percepción de “entrega” en áreas críticas como seguridad y orden.

Para un Gobierno que ha cimentado su narrativa en responder a una serie de emergencias ciudadanas, la luna de miel depende principalmente de la capacidad de lograr dar respuestas a estas demandas, con logros concretos en un breve periodo de tiempo. Por ejemplo, si los resultados en control territorial frente al avance del crimen organizado y gestión migratoria no son tangibles en el corto plazo, el votante retirará su apoyo con la misma celeridad con la que lo entregó, transformando la esperanza inicial en una crisis de expectativas.

Finalmente, la gobernabilidad del periodo inicial se ve amenazada por la tentación de la oposición de comportarse de manera “desleal”, fracturando la confianza institucional^{iv}. Cuando la oposición transita desde la fiscalización hacia la deslegitimación, la luna de miel desaparece aún más rápido para dar paso a un juego de suma cero, donde el gran perdedor siempre es el Gobierno en ejercicio.

ⁱ Navia y Perello (2019). *One-Night Stands and Long-Term Commitments: Presidential Approval for Sebastián Piñera in Chile, 2009-2014*.

ⁱⁱ Ramírez (2025). Democracia y delivery: la legitimidad política en la era de la inmediatez <https://lyd.org/wp-content/uploads/2025/09/SIP-203v4.pdf>

ⁱⁱⁱ Lau et al (2001). *Advantages and Disadvantages of Cognitive Heuristics in Political Decision Making*.

^{iv} Linz J. (1978). *The Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown and Reequilibration*. Johns Hopkins University Press.